

VIABILIDAD ECONÓMICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO COMPLEJO DE LA SALUD.

El Proyecto Complejo de la Salud, por su carácter social, no considera en su ejecución viabilidad financiera. Sin embargo con la División de Planes y Proyectos de la Dirección de Desarrollo Institucional, estamos avanzando en un ejercicio de cálculos de viabilidad financiera, apoyándonos en la información actual del costo de operación de las dependencias que harán parte del proyecto, y en los costos de operación proyectados y los ingresos que va a percibir el proyecto, tanto en lo financiero como en lo social por razones del servicio que se presta.

Son proyecciones, toda vez que se deben realizar los objetivos 1 (Articulación Académica); 2 (Articulación con el Entorno); y 4 (Procesos Administrativos y Académicos) que nos definirán el valor real de los costos de operación y los ingresos efectivos y sociales del proyecto.

El ejercicio de análisis financiero en el que se trabaja consiste en determinar si los ingresos de cada año restados de los gastos de cada año alcanzan para pagar la inversión del proyecto. Puede ser por ejemplo en un horizonte de tiempo de 20 años o más. Para efecto del cálculo se incluyen los ingresos por Extensión.

Más específico: Se calculan los ingresos y gastos de cada período de vida útil del proyecto, se traen a valor presente a una tasa de descuento del 12% (definido por el DNP) y se espera que con ese valor se alcance a cubrir la inversión realizada en los períodos iniciales del proyecto.

Alternativas

1. Se hace un cálculo de ingresos acudiendo a los beneficios sociales que se consiguen por consecuencia de los servicios que se prestarán con el proyecto. A manera de ejemplo, si conseguimos graduar una porción importante de los matriculados en primer semestre (se pueden hacer proyecciones) podemos considerar que los ingresos salariales que ellos obtienen luego de su graduación son beneficios sociales. Cuantificando esto en un período de tiempo, tendremos "ingresos suficientes" para pagar la inversión. Existen varias formas, estamos revisando qué otras opciones podemos utilizar. Esto se hace específicamente para la alternativa seleccionada del proyecto, que en nuestro caso es la construcción del Complejo de la Salud. Podríamos decir que las transferencias que recibe la Universidad desde el gobierno nacional para efectos de su operación, específicamente en lo referente a lo académico que proviene de fondos comunes, más los especiales que consiguen las Unidades Académicas, son los ingresos que pagarán la inversión. En lenguaje de proyectos, ellos existen por consecuencia del ingreso social que se obtiene de los servicios que se prestarán con el proyecto.
2. Un segundo camino es utilizando el modelo de costo-eficiencia. Como no hay ingreso suficiente para pagar la inversión, se desarrollan

completamente dos de las alternativas definidas por el proyecto. Una fue la construcción del CS, otra por ejemplo es la Construcción independiente de edificios por cada Unidad Académica. Tendríamos que hacer todos los estudios, diseños y cálculos de la inversión para esa segunda alternativa. El modelo costo eficiencia básicamente dice que seleccionemos aquella alternativa de menor inversión. Bastante difícil de hacer todos estos estudios y diseños para una alternativa que no se va a implementar, sólo se tendría en cuenta para hacer esta comparación.

De otro lado, la doctora Aracelly Lopera, trabaja actualmente, en una proyección de amortización del crédito, de acuerdo con la solicitud radicada en Planeación Nacional.

En concepto de la calificadora de Riesgo, la Universidad posee un cupo de crédito con FINDETER de hasta 220.000.000 millones de pesos, apalancado en recursos de estampilla. Es importante hacer claridad que los recursos de estampilla que tienen destinación específica para proyectos de inversión en infraestructura, y que no afectan de ninguna manera los recursos de funcionamiento de la Universidad, que se manejan en fondos comunes, y que cargan un déficit histórico, provienen de las partidas del gobierno nacional y departamental.

También se cuenta con recursos futuros de inversión para infraestructura, por Estampilla, y según concepto de la Comisión inmobiliaria nombrada por el Consejo Superior, por la proyectada venta de la Reforestadora San Sebastián y los predios Gil J. Gil, Parque E, Transportes Sierra y demás predios que no apoyen una función misional, por lo que es posible que el crédito que se contraiga no ascienda a los 220.000.000 millones.

El Consejo Superior, en su sesión del 25 de julio de 2017, aprobó la reinversión del IVA que se genere en la Facturación del Proyecto.

Igualmente se hace gestión con el municipio de Medellín, y con la gobernación de Antioquia, para apoyo en pago en el caso que se contraiga deuda con el BID.

En lo referente a lo ambiental, actualmente se construyen los términos de referencia para la Asesoría LID que acompañará los procesos ambientales y de sostenibilidad.